

Evacuados y dólares

Tenewicki, Mauricio

Mauricio Tenewicki: Economista argentino. Catedrático de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Consejo Directivo del Instituto Argentino de Desarrollo Económico - IADE, Buenos Aires.

A mediados del año 92, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se operaba por un monto diario de 150 millones de dólares - cifra igual a la suma de las operaciones diarias de todas las bolsas de América Latina - y las lluvias sobre la región del río Paraná anegaban varias ciudades y provocaban la evacuación de 150.000 personas. Todos saben del comportamiento cíclico de la cuenca de los grandes ríos del litoral argentino y saben que esos cataclismos son absolutamente previsibles y, por consiguiente, no son accidentes. La euforia de la bolsa de valores junto al infortunio de 150.000 inundados es un símbolo del desgarramiento social del país.

Para entrar al examen de las perspectivas del actual modo de desarrollo económico de la Argentina, hace falta abandonar los análisis habitualmente esquemáticos y al corto plazo que los economistas profesionales suelen proponer al conjunto de la sociedad. Parece más idóneo y revelador hacerse cargo de la realidad local intentando escrutar las líneas centrales de una dualidad en verdad esquizofrénica como la que hoy dibujan las circunstancias salientes que suceden en el país.

Conducción económica

El plan de estabilidad y convertibilidad reporta éxitos al gobierno, en especial cuando los momentos actuales son comparados con los que tenían lugar cuando fue puesto en práctica. Es notorio e indiscutible que se ha detenido la inflación de precios, se ha reactivado la actividad industrial, de la construcción y del comercio; ha habido recuperación del nivel de empleo y también del consumo tanto final como productivo.

Y tan cierto como todo eso es que se ha instalado una suerte de conciencia social generalizada que respalda este tipo de implementación. El discurso neoliberal hoy muy corriente gana espacios hasta hace poco inimaginables. Las posiciones que exhiben las mayorías dirigentes de los dos partidos políticos más importantes; los sindicatos de mayor envergadura; las entidades intermedias significativas dan prueba de ello. Por otra Darter también se han prestigiado las ideas que invisten al mercado como óptimo asignador de recursos y a la iniciativa privada y la competencia como promotoras del beneficio social.

De todas maneras superviven y se extienden reclamos generalizados fundados en el deterioro de las condiciones de vida y del funcionamiento de la sociedad. El «ajuste» neoliberal - procedente sin interrupción desde mediados de los 70 - viene produciendo la caída del salario real, tasas de desocupación elevadas, la decadencia de las prestaciones públicas en salud, vivienda y educación. En el informe de la CEPAL para 1990 se señala que: «...la Argentina es el único país de la región en que el crecimiento de la pobreza durante los últimos quince o veinte años se exhibió como un proceso sistemático y persistente». Por otra parte, en el Informe Anual del Banco Mundial 1991 se indica: «...la tasa de crecimiento de Argentina bajó de un promedio del 4% anual entre 1960 y 1973 a 0,8% entre 1973 y 1987».

Dados estos elementos cabe - quizá como la primera de las preguntas - interrogarse sobre si el actual proyecto está formulando una perspectiva distinta a las tendencias señaladas. En tal sentido es apropiado examinar algunos de los instrumentos de política que vienen utilizándose, porque cabe comprender que en ellos van implicadas las concepciones básicas de los ejecutores del plan.

La convertibilidad .

Como una especie de revival que evoca la época del patrón-oro, el gobierno y la ley argentinos garantizan irrestrictamente el cambio de la moneda local por la moneda norteamericana a una determinada paridad. Después de sucesivos episodios de expropiación de recursos del público, del achicamiento sin precedentes de la inversión y el gasto estatal, y del énfasis en la presión tributaria, el gobierno dispone de una masa de reservas de activos externos que le permiten respaldar la convertibilidad.

Este proceso de «dolarización» deprime la especulación contra la moneda local, coagula - así sea momentáneamente - la fuga de capitales porque estimula los depósitos en moneda local con la fácil valorización que producen altas tasas de interés locales. Por estos motivos se viene registrando un notable flujo de fondos desde el

exterior atraídos por inmediatas ganancias especulativas - tal cual sucedió en tiempos de la administración militar desde 1976 - que desempeña una notable función en la reactivación que tiene lugar desde abril de 1991.

Además, hay que tener en cuenta que la baja internacional de las tasas de interés favorece estos mecanismos, pero los marca con la provisoriedad que realmente tienen: es sencillo entender que el cambio de políticas financieras de EEUU puede muy bien quebrar esta repatriación de fondos, dado que en lo fundamental ellos no llegan para invertirse en la producción sino para aprovechar el diferencial ocasional entre tasas de interés. Obsérvense en esas apreciaciones los rasgos básicos de la convertibilidad. La «dolarización» de la economía es un acto explícito de la pérdida de la soberanía nacional para acomodarse a la transnacionalización económica; supone adaptarse pasivamente al comportamiento de la economía norteamericana o, lo que es lo mismo, renunciar a la posibilidad de políticas nacionales, porque antes que esos intereses prevalecerán las circunstancias del comercio exterior; de la política fiscal y del desenvolvimiento financiero de EEUU.

La estabilidad de la paridad cambiaria y por ende, de toda la política monetaria, está sujeta a desempeños tan inestables como los que muestran las variables norteamericanas, condicionadas por su creciente carácter de país deudor y con permanente déficit, tanto fiscal como externo¹.

El tipo de cambio atrasado.

La paridad establecida, inalterada hasta hoy desde abril de 1991, es de un peso por un dólar, lo que supone, a juicio de los tratadistas habituales de la materia, sobrevaluación para la moneda local. Hay coincidencias en señalar que el tipo real de cambio en mayo último fue un 35% de lo que era como promedio de la década 1980: un dólar compraba entonces 280% de lo que compra actualmente. Esta paridad sostiene fuertemente la estabilidad de precios porque abarata los productos exportables que en el caso argentino son principalmente alimenticios y de bienes-salario de consumo general; y porque en conjunto con las facilidades para importar constituye una fuerte presión a la baja de los productos industriales.

Se advertirá que además de efectos antinflacionarios, esta sobrevaluación de la moneda argentina supone un instrumento disciplinante sobre los sectores industriales nacionales no monopolísticos, los que no sólo quedan incapacitados para competir

¹El gobierno de EEUU acaba de informar que el déficit de la balanza comercial durante el mes de abril de este año acreció un 25% respecto del mes de marzo inmediato anterior. Ese guarismo fue de 6.970 millones de dólares; y sólo con respecto al comercio con Japón ese déficit fue en el mismo mes de 4.210 millones de dólares.

internacionalmente, sino que ven afectado su espacio en el mercado interno. Ahora bien, lo central y básico, el dato que preocupa seriamente, es que el deterioro del tipo de cambio que se acentúa en tanto crecen los precios internos, tiende a perjudicar el comportamiento de la balanza comercial, la que ya para 1992 registrará déficit.

El superávit fiscal.

Una de las condiciones necesarias de la actual política de estabilización es que se sostenga inalterable la relación cuantitativa entre la masa de la moneda local en circulación y en poder de los bancos y la masa de reservas constituidas en moneda extranjera. Por ello la ley sólo admite la emisión monetaria contra la adquisición de divisas y, simultáneamente, se trata de limitar tanto el gasto como la inversión públicos y llevar la recaudación tributaria a los niveles que sea preciso para satisfacer esas exigencias.

Consecuencias de estas políticas son la caída de la asignación de recursos para el sistema educativo, el desarrollo de la economía y las adquisiciones tecnológicas, el mantenimiento de las instituciones de salud pública y bienestar social. En verdad, la obtención del superávit fiscal tiende a satisfacer los pagos a que obliga el endeudamiento externo. En tal sentido el persistente sacrificio de las necesidades sociales y la acentuación del carácter regresivo del sistema tributario concurren a la generación de fondos a expatriar.

Las privatizaciones.

Del superávit fiscal también forman parte los bienes públicos que se venden o se entregan como forma de cancelación parcial de la deuda externa. El examen de las cuentas fiscales demuestra que los excedentes que vienen obteniéndose proceden de la venta de activos públicos: las reservas de petróleo, la mayoría accionaria de las empresas estatales de aeronavegación, telecomunicaciones, siderurgia. Se hallan en trámite avanzado las licitaciones para la venta de ramales ferroviarios, servicios de gas, y provisión de energía eléctrica.

Las políticas privatizantes están en el centro de la estabilidad monetaria y del discurso neoliberal. Ya han rendido sumas muy considerables al fisco y en términos inmediatos continuará siendo así; por otra parte, al admitirse la entrega en pago de títulos de la deuda pública externa, disminuye el monto de la misma. Y no es menos importante señalar que de este modo se estimula la credibilidad y la simpatía por parte de lo que suele denominarse «comunidad de negocios» la que retribuye prestando renovado apoyo a la implementación del gobierno. Por otra parte, el ale-

gato oficial computa que las privatizaciones son parte de un proceso más vasto de desregulaciones de la actividad económica y de coagulación del déficit presupuestario por la finalización de la ineficiencia de las empresas estatales. De este modo se propagarían mejoras a lo largo de todo el sistema y, consecuentemente, ventajas en la productividad y en los costos de producción.

Sin embargo, en las condiciones argentinas, las privatizaciones no suponen la desregulación de los mercados. Sólo significan el reemplazo de la regulación pública por la que ejercen los oligopolios que operan las ramas fundamentales de la economía. Para la mayoría de los casos relevantes sólo alcanza para reemplazar el monopolio estatal argentino por el monopolio estatal extranjero: son los casos de Iberia de aviación y Telefónica de España; y Telecom y Total, de Francia. Por otra parte, la perspectiva de continuar los pagos con la entrega de este tipo de bienes es de obvia corta duración dado que está limitada por la disponibilidad y factibilidad operativa de las empresas susceptibles de privatización.

Existen otras circunstancias que importa destacar. El énfasis que pone el gobierno en este proceso genera señales que determinan espacios de inversión. La participación en la adquisición de empresas de servicios monopólicos garantiza rentas extraordinarias, lo cual a su vez desestimula inversiones en otros rubros o sectores. Lo que sí se estimula es la aparición de resonantes casos de corrupción administrativa, porque las empresas advierten - y los funcionarios también - que aquellas rentas extraordinarias lo serán más si los contratos y licitaciones respectivas incluyen licencias y omisiones en dirección a esos propósitos.

Este es un modo explícito de perfilar la economía. No se tiende a construir un sistema sino que se crea una especie de bolsones independientes entre sí, concebidos sólo para el beneficio inmediato de sus operadores; en todo caso - sostiene la hipótesis oficial subyacente - el interés privado proveerá la asignación de recursos a que aspira el interés social. Por ahora esa presunción no se ha confirmado.

Por otra parte, la promesa implicada de ese modo es que a la finalización de este «ajuste» se equilibrarán las variables fundamentales y se obtendrán el crecimiento y la mejoría en el ingreso que son deseables.

Examen de posibilidades

Cuando se inquiera por la viabilidad de las políticas hoy planteadas, debe señalarse que, como quedó dicho, programaciones de este tipo suelen obtener consenso.

No proceder así supondría ignorar el vigor presente del discurso neoliberal y dejar de reconocer sus bases de sustentación. El desarrollo exitoso de los países capitalistas centrales - muy notablemente desde la segunda posguerra - y el derrumbe de los regímenes de los países del «socialismo realmente existente», son procesos que inducen a la aceptación generalizada de las teorías canonizadoras del mercado por su función optimizadora de la asignación de recursos y a la competitividad privada como promotora del beneficio social.

Son razonamientos inspirados por la realidad, no pura «ideología». Resultan evidentes el crecimiento de la productividad social, del ensanchamiento del rango de las posibilidades del consumo y de la ampliación de programas de previsión y seguridad sociales, acaecidos durante décadas en los países capitalistas más avanzados. De todas maneras, a partir de mediados de la década del 70, la economía mundial exhibe comportamientos erráticos y decadentes, muy particularmente perceptibles en las regiones del subdesarrollo. Por estas razones, los planes y ajustes «a la latinoamericana» hay que analizarlos según la óptica de la periferia. Examinaremos sectores específicos de la economía argentina para luego inferir la probable eficacia del ajuste en curso.

De la pampa y la industria

La tradicional producción primaria de la zona pampeana - carnes, cereales, oleaginosas, lanas y forrajes - es todavía fundamental en la composición de la canasta alimenticia local y en la de la balanza comercial externa, de la que forma más del 70%. Asimismo, ese tipo de producción resiste todavía la comparación con los niveles internacionales en cuanto a rendimiento y costos. Lo básico a considerar es que las tendencias mundiales van deteriorando el valor de este tipo de productos, que vienen disminuyendo de precio sostenidamente. Son procesos de «desmaterialización» y de baja general de precios de los productos normalizados. De lo que se trata es del abaratamiento relativo de los productos primarios respecto de los industriales y de los servicios calificados, en razón del desarrollo de innovaciones técnico-científicas que han extendido y facilitado la capacidad de producir en esas ramas, más allá de particularidades climáticas o edafológicas. Esto quiere decir - muy sintéticamente - que están perimiendo las casi míticas ventajas comparativas de la pampa húmeda.

La actitud mental y práctica frente a la industria nacional puede servir de test para quienes gobiernen en Argentina. El crecimiento industrial fue el fundamento progresista del país; la desindustrialización fue la consecuencia de la reacción conser-

vadora. Esto queda muy claro en estos días cuando se desconoce - por parte de economistas educados - cuestiones elementales como que el comercio mundial de manufacturas crece a tasas superiores a las del ingreso y del comercio globales; y cuando se ignora que el crecimiento industrial de los principales países desarrollados viene teniendo lugar a partir de políticas deliberadas. Hoy las autoridades argentinas declaran enfáticamente que «no hay políticas» para la economía y la industria.

Esta carencia declamada de políticas, se ha traducido en políticas concretas que hicieron que la industria argentina, que creciera 100% en la década 1964-1973, hoy observe la situación que se describe así: «Durante un dilatado período, la industria fue el eje dinámico del desarrollo económico argentino, principalmente por el proceso denominado de sustitución de importaciones. Inclusive, con sus demandas de cultivos 'industriales' llegó a paliar las crisis de la agricultura nacional (...) A comienzos de los años 90 el cuadro es radicalmente distinto. Su participación en el producto bruto - de por sí magro - no llega a la cuarta parte del mismo y ocupa bastante menos que la quinta parte de la fuerza de trabajo disponible. Los índices oficiales demuestran que su valor de producción apenas iguala a los del año base de 1970 y es inferior a los de mediados de aquella década (...) Puede concluirse que el equipamiento de nuestra industria sufre de marcada obsolescencia física, tecnológica y económica»².

Esta situación no se revierte a pesar de la reactivación apreciada desde hace un año porque, según lo explicitado por las autoridades, no existe política industrial en Argentina; de tal modo resta como «política» la redistribución regresiva del ingreso, lo cual implica un determinado perfil productivo para la industria, el que se orienta a las minorías y también - en el mismo sentido - opera el aperturismo en el comercio exterior exponiendo la industria local a la competencia internacional. De este modo la perspectiva industrial hay que preverla operando en un mercado interno estrecho, con limitadas posibilidades de creación tecnológica y con fuertes dificultades de generar exportaciones.

En verdad, no es fácil imaginar que las políticas liberales satisfagan no ya a las necesidades nacionales, sino los compromisos tomados con el FMI y los asumidos bajo el denominado Plan Brady. Los egresos requeridos para los próximos años suman alrededor de 3.500 millones de dólares anuales. Ya el presente año arrojará un déficit comercial, que es probable consiga en jugarse con flujos financieros externos y la venta de activos públicos, pero que - ya se indicó - no es previsible que conti-

²Adolfo Dorfman: «FIDE», Buenos Aires, 4/1992.

núen indefinidamente. Si se computa la inelasticidad de la producción agropecuaria y la caída de sus precios, la alternativa debería residir en el aumento de las exportaciones industriales.

Pero eso no será así. Vuelta, entonces, a este ciclo de reprimarización que desconoce o reniega de un proceso industrial capaz de competir internacionalmente y, por eso mismo, capaz de crecer y transferir ventajas adquiridas al interior del país, que se traducirían en la suba del empleo, del ingreso y de la educación. Y a la posibilidad, ¿por qué no?, de rediscutir desde otras posiciones el tratamiento del endeudamiento externo del país.

La desregulación y el mercado

Las privatizaciones suponen despojar a la gestión pública de los instrumentos concretos - las empresas - para operar en la economía y en la vida social. Las políticas de desregulación suponen el levantamiento, la neutralización de medidas y disposiciones públicas que median entre los ámbitos de la producción y las distintas esferas sociales demandantes y usuarias. Suele publicitarse que las desregulaciones tienden a la rebaja de costos, que anulan prebendas burocráticas, que facilitan en muchos casos la gestión empresarial. Esto acaso sea cierto y por eso recoge adhesiones en muchos casos; pero no por ello deja de ser una visión miope de los procesos en curso.

Suele haber regulaciones que favorecen a determinadas empresas, tipos de actividad, grupos de profesionales, etc., y significan sin duda privilegios irritantes porque están pensadas sólo en términos de beneficiar a ciertos grupos en particular. Pero la consecuencia de las desregulaciones es privar al conjunto social de las defensas indispensables que requiere en esta época de cambios. En Argentina desregular supone privar al gobierno de supervisar el comercio exterior y local de granos y carnes; supone debilitar y aun suprimir los controles aduaneros de las actividades financieras y cambiarias. Es todo esto y más aún: supone privarse de toda posibilidad de fomentar, proteger u orientar actividades que interesen al progreso social.

El argumento que respalda a las desregulaciones consiste en encarecer las virtudes de la libertad mercantil para procurar la eficiencia. Lo realmente llamativo es que este tipo de conceptos suelen aceptarse tan luego en Argentina, donde la instalación y funcionamiento del Estado-benefactor, y las políticas puntualmente dirigidas, disfrutaron de enorme consenso a partir de su consolidación como respuesta a la crisis de 1930. Hoy en Argentina se anulan las redes defensivas en circunstancias

en que se acentúan en todo el mundo transformaciones económicas y mutaciones políticas realmente trascendentales.

Esto acaece cuando los cambios tecnológicos que vienen teniendo lugar alcanzan plenamente a las sociedades periféricas, en las que no se produce la reconversión necesaria. Por el contrario, se retrocede. Las innovaciones científico-técnicas de la época posfordista, muy claramente apoyadas por la inversión estatal y la orientación de los gobiernos de los países desarrollados, no tienen lugar en el subdesarrollo que se desindustrializa. Cuando lo que va teniendo preeminencia son sistemas productivos intensivos en inteligencia, en este país caen los gastos en educación y ciencia e investigación a sus niveles más bajos por décadas.

La misma asimetría que se advierte en la generación y difusión de las transformaciones técnico-científicas, se produce en los flujos comerciales, productivos y financieros. Entre países desarrollados tiene lugar el 80% del comercio de manufacturas, lo cual determina - a su vez - la disminución de los productos primarios en las transacciones internacionales: esos productos significaban el 40% del total en 1955 y sólo el 17% en 1985.

Racionalidad neoliberal

Dados estos elementos, meros ejemplos del comportamiento de una economía fuertemente deteriorada, cabe interrogar a la lógica neoliberal en esta propuesta de desregular en un mundo en permanente e intensa regulación. La propuesta libre-cambista existe sólo como discurso abstracto. Los mercados no son ni libres ni transparentes. Las principales empresas y los gobiernos de los países desarrollados necesitan programar, introducir elementos de planificación que orienten los comportamientos futuros. Estas necesidades proceden de la naturaleza misma del tipo de inversión que tiene lugar hoy: su magnitud y el prolongado lapso que se requiere para su maduración no pueden estar sujetos a la «soberanía del consumidor» ni a la volubilidad coyuntural de algunos precios. Y debe agregarse, tal cual se aprecia en los vastos programas militares y de investigaciones espaciales, que esos gastos de tanta gravitación en las actividades productivas corren por cuenta de los gobiernos, son decisiones de orden político que no están mediadas por la competencia entre empresas privadas.

En cuanto al debilitamiento del Estado, no hay ejemplos de consideración en el mundo que hoy avalen la conducta del gobierno argentino a ese respecto. Mientras las más importantes naciones y economías se regionalizan, ensayan unificar sus

signos monetarios, sus normas y flujos comerciales; mientras se intentan vías prácticas para la transmisión del conocimiento entre los Estados y las entidades civiles, en Argentina se desmembra - sin plan ni concierto, sólo para satisfacer requerimientos financieros - las más importantes empresas públicas. Los recortes a los presupuestos para la educación vienen sumiendo a la escuela, a la universidad y a la labor científica en muy graves dificultades. En Argentina hay una renuncia expresa a fijar estrategias de largo plazo, a atender y anticiparse a los cambios en la coyuntura internacional, a intentar correctivos sobre los procesos cíclicos que conciernen al país. Es exactamente lo contrario de lo que suele suceder en los países capitalistas desarrollados. La desregulación y el debilitamiento del Estado son también - claramente - respuestas a la crisis que se importan de la experiencia reaganiana de los EEUU. Es decir, que son alternativas ya fracasadas, porque la economía norteamericana padece de dificultades cuya finalización no es previsible al corto plazo, y que aparecen muy enfatizadas por las políticas ofertistas y monetaristas cursadas en la década del 80. Las políticas neoliberales se allanan ante la presión de la crisis norteamericana: una implementación como la argentina, basada centralmente en compromisos con la banca trasnacional y las privatizaciones de los activos públicos, se convierte en sujeto pasivo de los avatares erráticos de los movimientos de capitales internacionales.

Notablemente, los actuales gobernantes argentinos sumen a su país en la reiteración de equívocos algunas veces trágicos: para la década de 1930 se ata al país a un imperio británico que ya había concluido su preeminencia de muchas décadas; hoy se vinculan de modo incondicional a los EEUU cuando esta nación no parece redimible; por lo menos no parece que pueda impedir el ascenso relativo y la preeminencia de los más importantes países europeos encabezados por Alemania y el sudeste asiático y Japón.

Para grupos gobernantes con mayor lucidez política que la que demuestran los argentinos, debería ser claro que más temprano que tarde deberá tener lugar el «ajuste» estadounidense. Esa nación, hoy el principal deudor del mundo, absorbe capitales en préstamos y saldos negativos en su balanza comercial en niveles tales que revelan claramente que la sociedad norteamericana vive por encima de sus posibilidades, a pesar de lo cual - y esto no es contradictorio con lo dicho - se acentúan los rasgos del deterioro social, económico y cultural de ese país.

Ausencia de perspectivas

De todos modos, una realidad tan confusa como la argentina no permite apearse a apreciaciones terminantes; los pronósticos no son sencillos y las opiniones son diversas. Lo que no suele explicarse claramente es la naturaleza y las perspectivas de las actuales transformaciones. Más específicamente, no se aclara sobre las resultantes de esta reestructuración del país; sucede que el futuro no es claro para nadie y que las perspectivas se tiñen de esa incertidumbre. Muy especialmente no se avizora nada que permita el supuesto de la detención de la decadencia de la economía y del comienzo de algún proceso expansivo.

Tampoco cabe suponer que puedan sobrevenir interrupciones bruscas y propuestas alternativas a cristalizarse al corto plazo. Para muchos, en sectores diversos, muy claramente los influenciados por la Iglesia católica, el programa económico en ejecución «afecta especialmente a los pobres» y debería tenderse a una mayor «justicia social», con lo cual las reformas en curso resultarían adecuadas. Es decir, que la inequidad no procedería de la naturaleza misma de la implementación, sino de la «insensibilidad» de los funcionarios.

Aunque estas opiniones no parecen apreciar adecuadamente el necesario carácter excluyente de los planes neoliberales, es preciso encontrar en ellas el requerimiento de la recuperación de la intervención del gobierno, de la sociedad, en la dirección de la economía: es la memoria histórica que reclama. Más todavía, hay que dar como muy factible que en algún momento cercano el gobierno opte por medidas puntuales en el orden del control de precios o de intervención en el comercio exterior. En dependencia de las convulsiones externas o de la magnitud que puedan adquirir las protestas sociales, el plan puede llegar a precipitarse en serias complicaciones que requieran del intervencionismo, hoy todavía inimaginable.

Desde ya, el plan de estabilización se resolverá políticamente. Por ahora la delantera la llevan los sectores beneficiarios de la crisis nacional que, en los hechos, consiguen la coparticipación de alguna parte de las mayorías damnificadas. Y a su vez esto es así - entre otras cosas - porque lo deletéreo de los planes de «ajuste» reside muy particularmente en la capacidad que tienen para deteriorar las posibilidades de decisión de la sociedad civil y del Estado, del país en su conjunto. Es innegable que está construyéndose una economía cada vez más pobre, una sociedad más injusta y una nación que se retrasa en el orden mundial; y éstas no son las mejores condiciones para obtener otro orden, una civilización democrática y progresista. El atraso económico y la anomia social retardan la constitución de sujetos históricos y

premisas económico-sociales capaces de alumbrar una contestación renovadora porque: la disminución relativa de la población asalariada en las principales ramas de la industria y el consiguiente debilitamiento de la negociación sindical rebajan la participación de los obreros en el conflicto social y en la mejoría del desarrollo tecnológico; los grupos empresarios más concentrados son titulares de los principales negocios vinculados a los pagos externos y a las privatizaciones, y antes que inversores, son conjuntos en búsqueda de cuasi-rentas y operaciones de beneficios extraordinarios; se ha ido diluyendo la influencia de la Universidad en la inteligencia colectiva. La carencia de recursos de los institutos de ciencia, técnica e investigación, el éxodo de talentos, inhiben la participación que todos ellos tuvieran en otras etapas de la vida del país; las prácticas políticas aparecen como incapaces de hacerse cargo de las demandas populares. Las discusiones parlamentarias, las expresiones de los partidos, parecen referirse a realidades distintas y lejanas de las que presenta la sociedad. El «lobby» es la mediación hacia el gobierno: las entidades intermedias que alguna vez fueran poderosas van cediendo ante grupos muy reducidos de empresarios poderosos o «comunicadores sociales» con buena difusión. Determinadas grandes empresas suelen tener más poder que las corporaciones tradicionales; esto parece emerger de la diferenciación relativa entre empresas y grupos empresarios al interior de las corporaciones, en razón del grado de concentración que aquellas detentan al interior de su rama.

Comentario final

La lógica liberal enseñoreada en Argentina no parece en camino de producir los cambios en el sentido que sus mentores prometen. Es muy difícil suponer que pueda reactivarse y crecer una economía en la que no se invierte ni se diversifica en el agro de exportación, en la cual se deprimen las zonas de cultivos industriales, en la que quedan cerrados los caminos hacia las exportaciones industriales por falta de estímulos y tipo de cambio adecuados, en la que el mercado interno se deprime por la caída del salario real y del gasto público. Tampoco se está en trance de detener el proceso de marginalización de crecientes grupos de población y de concentración de recursos y poder en sectores muy reducidos.

Muy bien puede suceder que la implementación neoliberal continúe siendo consentida: al fin y al cabo ello ya viene sucediendo desde hace muchos años; pero tales perspectivas no aparecen como compatibles con el fortalecimiento del consenso y de la convivencia democrática. El malestar social y los trastornos económicos van a multiplicarse y la legitimidad política que hasta hoy puede exhibir no parece que pudiera prolongarse demasiado.

De todas maneras cualquiera sea la posibilidad para la reversión de estas perspectivas, no hay ninguna que pueda originarse en otra situación que no sea la presente; es decir, que las transformaciones hasta ahora producidas no tienen retorno, no hay lugar para la nostalgia. Políticas como las actuales que sólo refuerzan las condiciones críticas de la sociedad pueden muy bien incubar respuestas de signo contrario, pero nunca podrán instalar realidades que ya fueron.

Referencias

*Dorfman, Adolfo, FIDE. - Buenos Aires, Argentina. 1992;